

Afinar la estrategia

- Fallas en los “soldados campesinos”
- Un Ministro de Defensa ausente

EL ataque criminal cometido por el frente 29 de las FARC contra la base fluvial de Iscuandé, Nariño, no sólo llevó a los colombianos a recordar épocas pasadas en las cuales la insurgencia llegaba y arrasaba con batallones y cuarteles de la Fuerza Pública, sino que llamó la atención sobre algunas fisuras que se empiezan a abrir en la llamada Política de Seguridad.

Uno de los temas centrales de la discusión tiene que ver con la eficacia de los llamados “soldados campesinos”, programa diseñado por el presidente Álvaro Uribe con el fin de proteger pequeñas poblaciones apartadas de los centros urbanos. La iniciativa tiene como objetivo recuperar la presencia del Estado en aquellas regiones alejadas mediante la utilización de jóvenes provenientes de la misma zona que deben proteger y mantenerse de enlace con los batallones de altas montaña o las brigadas móviles.

De esa forma no sólo logran custodiar el territorio asignado sino que, además, el Estado evita la desertión rural que produce el hecho de que los soldados tengan que salir de su pueblo natal a prestar el servicio militar a otros lugares de donde muy pocas veces regresan. En ese sentido, se trata de que sea la misma comunidad la que se encargue de su propia seguridad y a la vez de crear empleo.

Pero el lamentable episodio de Nariño demuestra que ese programa tiene sus bemoles. Para empezar quedó demostrado que la sola cobertura del territorio no garantiza el éxito de la estrategia; es decir, llenar a las poblaciones apartadas de soldados y policías oriundos de esos pueblos no soluciona el problema. Si ellos no cuentan con los equipos suficientes, el entrenamiento necesario y, sobre todo, el respaldo efectivo e inmediato de otras fuerzas, por ejemplo, la Fuerza Aérea, serían simplemente carne de cañón de la guerrilla o de los grupos paramilitares. El asunto no es de cobertura sino de estrategia y de capacidad de reacción.

Curiosamente la que se podría considerar la mayor fortaleza del programa -el hecho de que el soldado pertenezca a la región que debe cuidar- se ha convertido en su más grande debilidad. ¿Cómo impedirle al uniformado que salga a visitar a sus amigos, o a su novia en el pueblo? ¿Cómo evitarle que se encuentre con sus compañeros de colegio? ¿Cómo impedirle que se tome un trago?

Si se aísla al soldado, entonces ¿cómo obtiene la información que permita evitar un ataque o una toma guerrillera? En otras palabras: ¿cómo hace inteligencia? Y si le permiten que visite a sus paisanos entonces sucede lo que parece que ocurrió en Iscuandé: los soldados y sus comandantes se rela-

jan, se distraen y se convierten en objetivos vulnerables. Esa amarga experiencia la vivió la Policía hace ya algunos años. Se trata, pues, de un círculo vicioso que resulta bastante difícil de romper.

El tema de la capacidad de reacción de la Fuerza Pública también empieza a generar inquietud. El mes de enero fue particularmente activo por parte de las organizaciones subversivas, en especial las FARC, y la respuesta no tuvo la contundencia que se esperaba.

Primero los bombardeos a las fincas del gobernador de Sucre y un ganadero de ese departamento, y luego la fuga de 22 guerrilleros de las FARC de la cárcel de Picalcña en Ibagué, la cuarta ciudad capital en que incursionan las FARC durante el gobierno Uribe, después de El Nogal en Bogotá, un gran centro comercial de Cúcuta y la doble vez que entraron en Neiva, fueron casos recientes de no poca monta. También en enero se produjo la pérdida de otro helicóptero Black Hawk artillado -el país en un año pasó de doce a diez-, como también los ataques contra las torres de interconexión en Arauca que dejaron sin luz al departamento por varias semanas sin que Venezuela ayudase por la crisis, la muerte de 14 infantes en Iscuandé y la de ocho soldados en Putumayo, entre otros.

En lo que tiene que ver con los golpes propinados a los cabecillas de las FARC, curiosamente, estos han sido asestados por fuera de Colombia. A Simón Trinidad lo capturaron en Ecuador, siendo comandante del Ejército el general Martín Orlando Carreño; mientras que a Rodrigo Granda lo detuvieron el pasado 13 de diciembre en Caracas, hecho que generó la crisis con Venezuela.

Aunque es cierto que se ha recuperado la seguridad en las carreteras -entre otras cosas a partir de desalojo que hacen las tropas de varios corredores estratégicos durante las llamadas caravanas turísticas-, la opinión pública sigue a la espera de los resultados contundentes contra los frentes de las FARC, ubicados en el sur del país, luego de un año de haber sido activado el llamado “Plan Patriota”, diseñado como la más grande ofensiva contra esa organización.

Esta serie de hechos demuestran que mientras el gobierno se distrae elaborando tesis académicas acerca de si Colombia está o no frente a un conflicto armado, es cada día más urgente afinar la estrategia militar con el fin de evitar que casos como los de Iscuandé se repitan. De no hacerlo pondría en riesgo su más importante columna vertebral. Y ello no se logra con destituciones y arrebatos, y menos con un Ministro de Defensa ausente.